Reporte sobre la Magistratura en el Mundo

(Reserva de Derechos: 04-2011-102610220300-102)*

OEA (CIDH):

- **CIDH solicita a la Corte IDH medidas provisionales a favor de Jorge Glas en Ecuador.** La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó el 1 de julio de 2025 a la Corte Interamericana medidas provisionales a favor de Jorge David Glas Espinel en Ecuador, tras considerar que se encuentra en una situación de extrema gravedad y urgencia de daño irreparable a sus derechos a la vida, integridad personal y salud. Jorge Glas es ex vicepresidente del Ecuador. Él se encuentra privado de libertad en el Centro de Privación de Libertad (CPL) Guayas N° 3, Guayaquil. Como antecedente, la Comisión otorgó medidas cautelares a su favor el [31 de diciembre de 2019](#). Posteriormente, tras considerar la información, reportes, soporte documentario y pretensiones de las partes entre abril de 2024 y febrero de 2025, la CIDH emitió la [Resolución de Seguimiento y Ampliación N° 13/2025 de 10 de febrero de 2025](#), donde requirió al Estado medidas inmediatas para la salvaguarda de la vida, la salud y la integridad de Jorge Glas. Ello, en virtud del diagnóstico médico e intento autolítico de 7 de abril de 2024, así como el impacto de las condiciones de detención y seguridad del CPL Guayas N° 3 en su salud mental, constatadas por la CIDH en su visita a terreno en octubre de 2024, y el soporte documental médico disponible. Entre las medidas solicitadas al Estado, la CIDH requirió: que el propuesto beneficiario fuera derivado de inmediato a un hospital para su valoración médica completa; su traslado a un nuevo centro de detención, distinto al CPL Guayas N° 3, que cumpla con los estándares aplicables a su situación de salud; que se retome la "Mesa Técnica" con participación de médicos de confianza para resolver controversias médicas y tener el tratamiento adecuado; que se permita el acceso a la información médica del propuesto beneficiario de manera oportuna; y que se continúen las investigaciones judiciales correspondientes sobre los hechos que dieron lugar a la adopción de las medidas cautelares. Tras la decisión de la CIDH de febrero de 2025, y valorar la información disponible por las partes, la CIDH consideró que la situación de Jorge Glas calza en el supuesto de extrema gravedad, urgencia e irreparabilidad del daño establecida en el artículo 63.2 de la Convención Americana. Las medidas provisionales son emitidas por la Corte Interamericana en casos de extrema gravedad y urgencia para evitar daños irreparables a las personas. Las mismas tienen carácter obligatorio para los Estados por lo que las decisiones contenidas en las mismas exigen a los Estados adoptar acciones específicas para resguardar derechos y/o proteger la vida de personas que están en riesgo. La CIDH es un órgano principal y autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), cuyo mandato surge de la Carta de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos. La Comisión Interamericana tiene el mandato de promover la observancia y la defensa de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia. La CIDH está integrada por siete miembros independientes que son elegidos por la Asamblea General de la OEA a título personal, y no representan sus países de origen o residencia.
- **La RELE publica edición actualizada del “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”.** La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publica una actualización de su “Marco jurídico interamericano sobre el derecho a la libertad de expresión”, que recopila estándares que los órganos del sistema interamericano de derechos humanos han desarrollado con respecto a este derecho. El informe presenta de manera estructurada los estándares sobre libertad de expresión desarrollados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), la CIDH y su RELE. Uno de sus principales propósitos es facilitar la consideración e implementación de dichos estándares en los distintos ámbitos del hemisferio para la protección de la libertad de expresión. Esto incluye el poder judicial, la formulación de políticas públicas, iniciativas legislativas, investigaciones académicas y actividades de defensa de los derechos humanos, entre otros. La primera edición del Marco Jurídico Interamericano, publicada en 2009, fue actualizada con base en documentos del sistema publicados hasta el primer semestre de 2024. Ello incluyó las sentencias y opiniones consultivas de la Corte IDH, resoluciones de la Comisión interamericana, informes de la CIDH y su RELE, así como Declaraciones Conjuntas y otros pronunciamientos de la Relatoría Especial. Asimismo, el documento recibió una actualización de su

estructura de capítulos internos para reflejar los avances. Así, el informe incluye el reconocimiento de nuevas categorías de discursos especialmente protegidos, como el discurso sobre asuntos ambientales y los discursos que denuncian la violencia de género; las nuevas relaciones con este derecho que se han establecido en la jurisprudencia en los últimos 15 años, el rol de la libertad de expresión en materia de libertad sindical y en la defensa de derechos laborales, y el avance jurisprudencial acerca de la incompatibilidad de la legislación penal para proteger el honor de funcionarios públicos por comentarios críticos. El documento también refleja la inclusión de las demandas estratégicas en contra de la participación pública (SLAPP, por sus siglas en inglés) como categorías de análisis en los estándares interamericanos, así como el trabajo más reciente de la RELE acerca del alcance de los discursos no protegidos por el artículo 13.5 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), incluyendo la apología del odio que constituya incitación a la violencia. Entre las actualizaciones también se encuentran referencias al desarrollo de estándares específicos sobre derecho a la libertad de expresión en internet, temática que encontró amplio desarrollo en el sistema interamericano desde 2009; el reconocimiento del derecho a la protesta y las primeras sentencias de la Corte IDH sobre la violación del derecho a la libertad de expresión y de asociación en el contexto de protestas ciudadanas; y el desarrollo jurisprudencial sobre el derecho a la autodeterminación informativa, incluyendo su vínculo con el artículo 13 y la protección de actividades como el periodismo y la defensa de los derechos humanos. Asimismo, releva la mirada de la CIDH, su RELE y la Corte Interamericana sobre la protección reforzada de los discursos de grupos en situación de vulnerabilidad, destacando por ejemplo la importancia de las medidas positivas para garantizar la libertad de expresión de mujeres periodistas, o el rol de las radios comunitarias para la diversidad en los medios de comunicación en el continente. Con la publicación de esta actualización del Marco Jurídico, la RELE busca aportar elementos sistematizados para que los Estados y los distintos actores de la sociedad civil contribuyan a la protección del derecho a la libertad de expresión en sociedades plurales y democráticas. Asimismo, se reafirma el postulado que ubica el derecho a la libertad de expresión como un pilar indispensable de las democracias interamericanas. La Relatoría reitera su disposición para continuar brindando asistencia técnica y colaborando con los Estados, personas e instituciones usuarias del sistema interamericano de derechos humanos para la promoción y defensa de la libertad de expresión. **Para acceder al informe completo, haga [clic](#)** La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión es una oficina creada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), a fin de estimular la defensa hemisférica del derecho a la libertad de pensamiento y expresión, considerando su papel fundamental en la consolidación y el desarrollo del sistema democrático.

Argentina (Diario Judicial):

- **Tribunal rechazó la acción de amparo colectiva iniciada por más de 4,000 usuarios del servicio de energía eléctrica provincial que cuestionaban los aumentos de tarifas.** Un grupo de más de 4000 usuarios del servicio eléctrico en la provincia de Corrientes dieron inicio a una amparo colectivo donde reclamaban la declaración de inconstitucionalidad del contrato de suministro de energía eléctrica de la DPEC (Dirección Provincial de Energía de Corrientes), en tanto incluía un incremento en las tarifas. Para los actores, el aumento era “arbitrario, desmedido, irrazonable y confiscatorio”, lo que llevaba a que se deba considerarlo inconstitucional, ya que según argumentaron, se aprobaron con graves omisiones, comunicación inadecuada, con audiencias públicas “carentes de validez”, sin el debido control del gobernador, sin una base de legalidad o razonabilidad, con un cuadro tarifario “ininteligible” para el común de los usuarios, entre otros. Así fue, que dieron apertura al expediente “A. M. A., A. J. R. I . y otros c/ Dirección Provincial de Energía de Corrientes, Gobierno de la Provincia de Corrientes, Ente Provincial Regulador Eléctrico s/ Amparo”, donde además requirieron ante el Juzgado Civil y Comercial N° 8 de la ciudad de Corrientes, el dictado de una medida cautelar que suspenda los corrrtes de energía por falta de pago y que se suspenda el cuatro tarifario vigente. El juez Leonardo Roberto Sanchez, terminó declarando inadmisibile la acción de amparo interpuesta, siendo esta vía “excepcional, sumaria y expeditiva, con plazos acotados, en virtud de la cual se busca la protección judicial de las garantías y derechos previstos en la Constitución cuando estos son vulnerados de modo manifiesto por actos u omisiones de autoridades públicas o particulares, y siempre que no exista un remedio procesal más idóneo”. **“La acción de amparo, por el solo hecho de invocar derechos constitucionales, no puede sustituir procedimientos especializados establecidos por el legislador para esos casos. No acudir directamente a las vías idóneas y especializadas creadas por la ley, significaría desnaturalizar la finalidad del amparo como medida excepcional”.** Además, “la arbitrariedad o ilegalidad que se reclama, no surge de manera manifiesta, es decir, no es clara, palmaria y notoria, por lo cual, para su dilucidación, se exige una mayor amplitud de debate y prueba, lo que no se logra con el acotado marco cognitivo del sumarísimo procedimiento del amparo”. En tal sentido, el tribunal resaltó que “La complejidad

de la presente causa está dada por el abundante número de páginas de la demanda, los más de cuatro mil actores, la voluminosidad de documentales y pruebas, y la multiplicidad de pretensiones, lo que hace imposible un adecuado análisis en los plazos perentorios de un amparo”. Sumado a ello, el “cuadro tarifario de la DEPEC goza de viso de legalidad, no vislumbrándose a priori vicio en el procedimiento del dictado de la normativa, llevándose incluso a cabo la audiencia pública... Vale decir, desde el punto de vista formal no se constata ilegalidad alguna”. Explicó también el magistrado que el código procesal administrativo fijaba un “procedimiento especializado y específico para canalizar el presente reclamo, donde se robustecen los principios y garantías, y con el cual se lograría una mayor efectividad en la tutela judicial de los derechos que se pretenden proteger”, estando además excluida la vía de amparo por Ley 2903 (art. 2). En conclusión, manifestó que “la acción de amparo, por el solo hecho de invocar derechos constitucionales, no puede sustituir procedimientos especializados establecidos por el legislador para esos casos. No acudir directamente a las vías idóneas y especializadas creadas por la ley, significaría desnaturalizar la finalidad del amparo como medida excepcional”.

Bolivia (Correo del Sur):

- **TCP reafirma su respaldo al proceso electoral del 17 de agosto y pide respeto a la independencia de poderes.** El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) ratificó este martes su compromiso con la celebración de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto de este año, y exhortó a las autoridades de los distintos órganos del Estado a respetar los principios de independencia, separación de poderes, así como la coordinación y cooperación interorgánica. “El Tribunal Constitucional, todos somos testigos, ha definido que su accionar debe estar guiado por la premisa del respeto y la vigencia del sistema democrático. La vigencia y el respeto de la democracia. El soberano, en nuestra Constitución Política del Estado, el pueblo, ha establecido que la máxima expresión de la democracia son las elecciones, es el acto electoral”, expresó el decano del TCP, Yván Espada, durante una conferencia de prensa en Sucre. En ese contexto, Espada recordó que el TCP firmó un acuerdo con el Tribunal Supremo Electoral (TSE) el pasado 16 de enero, con el objetivo de garantizar el desarrollo del proceso electoral. “Todo el accionar del Tribunal Constitucional Plurinacional se ha enmarcado en el cumplimiento de este acuerdo, en el cumplimiento del cronograma electoral, en el cumplimiento de las normas y principios que exige este proceso electoral”, agregó. La declaración fue realizada luego de que el TCP resolviera dejar en suspenso la cesación de funciones de una magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), en el marco de su rol como garante del respeto a la Constitución y a los derechos fundamentales. “Aprovechamos también esta oportunidad para reafirmar nuestro compromiso con la realización de las elecciones el 17 de agosto de este año”, concluyó Espada. El TCP aseguró que hará cumplir la Constitución Política del Estado, las leyes vigentes y los principios democráticos, priorizando en todo momento la preservación de los derechos fundamentales de la población boliviana.

Colombia (CC):

- **Corte Constitucional: las personas en habitabilidad de calle son sujetos de especial protección constitucional y corresponde al Estado y a la sociedad hacer efectivos sus derechos.** *La Corte recordó que la protección de las personas habitantes de calle deriva de los derechos a la dignidad humana e igualdad, así como del principio de solidaridad.* La Sala Segunda de Revisión amparó el derecho a la salud en su dimensión de diagnóstico, así como los derechos a la intimidad y a la propia imagen de *Natalia*, una mujer en condición de habitabilidad de calle, diagnosticada con VIH y esquizofrenia, cuyo médico tratante la había remitido en varias oportunidades a un centro de larga estancia, sin que dicho traslado se materializara. Sobre el derecho a la salud recordó que este abarca una amplia gama de factores que inciden en la posibilidad de que una persona pueda llevar una vida sana y digna. Dicha garantía aplica los principios de continuidad, que implica que las entidades encargadas de prestar el servicio de salud deben evitar limitaciones injustificadas que lleven a la suspensión o interrupción del tratamiento. Integridad, por el cual el Estado y las entidades encargadas de la prestación del servicio de salud tienen que garantizar de manera completa los servicios y tratamientos requeridos por el paciente. Y oportunidad, que conlleva a que el servicio sea prestado sin demoras y en el término correspondiente, por lo que los retrasos en la prestación solo pueden admitirse por justificaciones médicas. La Corte también reiteró que el diagnóstico es un componente del derecho a la salud. Aquel implica el acceso a una valoración técnica, científica y oportuna que defina con claridad el estado de salud del paciente y los tratamientos que requiere. Adicionalmente, recordó que el diagnóstico no se puede limitar a la atención de una única enfermedad, sino que debe ser integral, en consideración al estado de la persona. De otro

lado y sobre el uso de la propia imagen en redes sociales, la Corte señaló que difundir cierto tipo de fotografías sin consentimiento ni justificación legal o constitucional puede generar un reproche social o causar la vulneración de derechos. Si bien en este caso la publicación de una foto de *Natalia* fue usada con el objetivo de ayudarla a reencontrarse con su familia, esta tenía una naturaleza íntima, ya que ella se encontraba desubicada y en ropa interior. Por ello, la divulgación de la fotografía podía tener impactos lesivos en sus derechos, específicamente en el relacionado con el uso de la propia imagen. La Sala Segunda de Revisión consideró que si bien en un momento inicial la publicación tenía una finalidad solidaria y loable, mantenerla en una red social de naturaleza abierta constituyó una conducta no amparada bajo la garantía de libertad de expresión. Ello por cuanto dicha libertad impone el deber a quien la ejerce de no vulnerar derechos ajenos y esa responsabilidad depende del alcance, el contexto, las circunstancias y el contenido de la información divulgada. Adicionalmente, consideró que la finalidad con la que fue compartida la foto en redes sociales se hubiese podido lograr por otros medios que resultaban menos invasivos y más garantistas con los derechos de la agenciada. Por último, la Corte recordó que la protección de las personas habitantes de calle deriva de los derechos a la dignidad humana y a la igualdad, así como del principio de solidaridad. Esto implica que la responsabilidad en la garantía de sus derechos no es solo individual, sino que corresponde al Estado y a la sociedad. En consecuencia, la Sala le ordenó a la EPS a la cual se encuentra adscrita *Natalia* realizarle una valoración médica integral, especializada e interdisciplinaria. Asimismo, le ordenó al perfil de Facebook que publicó la foto referida, si no lo ha hecho, eliminar de manera definitiva la publicación realizada en noviembre de 2024 y en todas sus redes sociales. [Sentencia T-152 de 2025](#). M.P. Juan Carlos Cortés González

Costa Rica (La Nación):

- **Corte Suprema solicita levantar inmunidad al presidente Rodrigo Chaves por presunto giro de dinero a Choreco con fondos del BCIE.** El Tribunal de Corte Plena acordó este martes solicitar a la Asamblea Legislativa levantarle la inmunidad al presidente de la República, [Rodrigo Chaves](#), para que afronte una acusación por un presunto delito de concusión en un contrato de \$405.800 financiado por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE). La acusación señala que Chaves habría pedido al empresario audiovisual Christian Bulgarelli entregar \$32.000 a su exasesor de imagen, Federico “Choreco” Cruz, a cambio de la adjudicación del contrato para dar servicios de comunicación a Casa Presidencial en el primer año del gobierno. **¿Cómo se levanta la inmunidad a un presidente?** El dinero se habría usado **para que Choreco enganchara una casa** en el condominio Barlovento, en Concepción de Tres Ríos. La votación en el Tribunal de Corte Plena quedó con **15 votos a favor y siete en contra**. Esta **es la primera vez** que la Corte solicita levantarle la inmunidad un presidente de la República en ejercicio. Además de Chaves, los magistrados solicitaron el levantamiento del fuero de improcedibilidad (inmunidad) al **ministro de Cultura, Jorge Rodríguez Vives**, quien está acusado por los mismos hechos. Él se desempeñaba como jefe de despacho del presidente cuando se produjo la contratación. La tesis de la Fiscalía es que el contrato fue hecho a la medida para que la empresa de Bulgarelli, RMC La Productora S. A. (Nocaut), ganara el contrato con el BCIE y que parte de esos fondos públicos se utilizaran para beneficiar a Choreco, a quien se le sigue un proceso judicial aparte por los mismos hechos en la Fiscalía de Probidad. Él no goza de inmunidad. La acusación contra Chaves y el ministro Rodríguez fue presentada hace tres meses, el 7 de abril. **¿Qué es concusión?** Según el artículo 355 del Código Penal, se impone una pena de dos a ocho años de cárcel al “funcionario público que, abusando de su calidad o de sus funciones, obligare o indujere a alguien a dar o prometer indebidamente, para sí o para un tercero, un bien o un beneficio patrimonial”. **¿Qué sigue ahora?** Ahora, lo que corresponde es enviar la solicitud al Congreso para que este analice el expediente. La Asamblea Legislativa tendrá que **formar una comisión** que emita una recomendación al plenario legislativo. Según establece el artículo 217 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se tendrá que leer el informe de la comisión y se le podría dar la palabra al acusado, si decide asistir al Congreso. Finalmente, el levantamiento de la inmunidad **procedería si recibe 38 votos a favor en el plenario**. El trámite podría agilizarse si los funcionarios renuncian a la inmunidad de manera voluntaria. Si la decisión del Congreso es negativa, el caso en contra de la persona acusada no desaparece. La inmunidad de las autoridades solo les cubre durante sus períodos en el cargo, de manera que el Poder Judicial puede retomar el proceso y juzgar a la persona en cuestión como un ciudadano común tan pronto como termine su periodo en el cargo. Hasta hace unos años, el reglamento legislativo indicaba que la votación tenía que ser privada. Pero dicha normativa fue eliminada recientemente por un fallo de la Sala Constitucional. **Los audios de la Presidencia.** La acusación de la Fiscalía General tomó elementos de [Los audios de la Presidencia](#), un conjunto de grabaciones hechas por la exministra de Comunicación, Patricia Navarro, en los que Chaves, Bulgarelli y Jorge Rodríguez hablan sobre la contratación del BCIE. En las conversaciones, dadas a

conocer en exclusiva por *La Nación*, se escucha a Rodrigo Chaves pedir **el contrato** porque tenía “un montón de antojos” y quería pedir “**un par de chineos, de cariñitos**”. Además, se escucha cuando el mandatario preguntó si “**Choreco**”, **sería parte de ese contrato de Bulgarelli**. **La confesión de Bulgarelli**. **Christian Bulgarelli Rojas** le confesó a la Fiscalía General que, por **solicitud de Rodrigo Chaves**, depositó \$32.000 en favor de Choreco. Precisó que depositó el dinero en la cuenta bancaria de la propietaria de una vivienda en el condominio Barlovento, para que Cruz pudiera alquilarla, con opción de compra. Justamente en ese condominio, el 8 de agosto del 2024, **la Fuerza Pública ejecutó una orden de desalojo por impago en contra de Federico Cruz**, quien dirigió la comunicación del mandatario en campaña y fue uno de sus principales consejeros en la primera parte del gobierno. **Caso por presuntos delitos electorales**. Aparte del caso del BCIE, Chaves afronta otra acusación penal por presuntos delitos electorales en el financiamiento de la campaña política del 2022. Este asunto aún no ha llegado a la Corte Plena. **El 23 de junio, la Fiscalía General a Chaves, a la diputada Pilar Cisneros, al vicepresidente Stephan Brunner, al canciller Arnoldo André Tinoco y a tres diputados más: Luz Mary Alpízar, Waldo Agüero y Paola Nájera**, del gobernante Partido Progreso Social Democrático (PPSD). Según la Fiscalía, se **captaron recursos y se cubrieron gastos proselitistas mediante dos estructuras paralelas de financiamiento** que operaron **margin de la ley**, sin control partidario ni reportes públicos de los donantes.

España (Poder Judicial):

- **Tribunal absuelve a un hombre condenado a 4 meses de prisión por responder con un golpe a un puñetazo recibido**. El Tribunal Superior de Justicia de Navarra (TSJN) ha revocado una sentencia dictada el pasado marzo por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial y ha absuelto a un hombre condenado a 4 meses de prisión y un tercio de una indemnización de 111.331,95 euros por haber respondido con un golpe en el cuerpo a la persona que le había propinado un puñetazo en la cara. En la sentencia, que puede ser recurrida ante el Tribunal Supremo, la Sala de lo Civil y Penal del TSJN sostiene que no se puede concluir que la conducta del defensor sobrepasase los límites razonables de la autoprotección. Sobre las 21 horas del 19 de febrero de 2021, el perjudicado, y coacusado, accedió a un bar de Lodosa, en cuyo interior se encontraba el otro procesado —propietario del establecimiento—, la camarera del mismo, que era expareja sentimental del primero, y la hija menor de esta. En el interior del establecimiento no se encontraba más gente, ya que el mismo tenía la verja echada, aunque no cerrada. Tras acceder al local y agarrar un taburete, el hombre comenzó a gritar y, dirigiéndose al dueño, le dijo: “Por dónde empiezo ahora, dónde está mi mujer”, lo que motivó que la hija acudiera al interior del almacén para avisar a su madre de que no saliera. Al llegar a la altura de la cocina con el taburete agarrado, el coprocesado se dirigió hacia el propietario, diciéndole “te voy a matar”. Según se relata en la sentencia, cuando se metió hacia el interior de la barra, el acusado fue tras él, sin taburete, acometiéndole con su cuerpo, empujándole contra la cafetera y diciéndole “te voy a matar”. Tras lograr zafarse de su agresor, el dueño salió a la calle y convino al agresor a que le acompañara. Ya en el exterior, volvió a amenazarle de muerte y, a continuación, le dio al propietario del bar “un puñetazo en la cara” que le causó lesiones en el labio. El agredido, según recoge la resolución judicial, “para defenderse le propino un golpe en la parte alta del cuerpo”, que le hizo caer al suelo. Se golpeó la cabeza y quedó inconsciente. Como consecuencia de la caída, precisó de 196 días para su curación. Las lesiones sufridas le produjeron epilepsia. En el momento de los hechos, el lesionado se encontraba influenciado por una previa ingesta de bebidas alcohólicas que limitaban sin anular sus capacidades volitivas y le ocasionaban un deterioro grave del rendimiento psicomotor. Por estos hechos, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial condenó al dueño del bar a 4 meses de prisión por un delito de lesiones con la concurrencia de la eximente incompleta de legítima defensa, así como a indemnizar a la víctima en un tercio de la cantidad de 111.331,95 € por los daños y perjuicios sufridos (lesiones y secuelas). El perjudicado, que a su vez era también coacusado, fue condenado por un delito leve de lesiones y otro leve de maltrato con la atenuante de embriaguez a sendas multas de 240 euros, esto es, un total de 480 €. Asimismo, la Audiencia le condenó a indemnizar al propietario del establecimiento con 300 euros por las lesiones sufridas a consecuencia del puñetazo propinado. **Conducta agresiva del lesionado**. En su sentencia, la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Navarra estima el recurso presentado por la defensa del dueño del bar y aprecia la existencia de la eximente completa de legítima defensa. Al respecto, los magistrados destacan “la conducta agresiva” del coinculpadado cuando entró al establecimiento, en donde profirió amenazas de muerte, al igual que hizo en el exterior del local. Para los jueces, el puñetazo en la cara constituyó una “agresión ilegítima”, uno de los requisitos que prevé la ley para la apreciación de la legítima defensa. En este punto, la Sala reflexiona si la conducta defensiva del agredido resultó “racionalmente necesaria y proporcional”. “Ese golpe en la parte alta del cuerpo fue la opción defensiva escogida por

quien, indudablemente, resultó objeto de una agresión ilegítima, no provocada por él, que ponía en cierto y objetivo peligro su indemnidad física. Recordemos que [el dueño] había sido primeramente amenazado de muerte, acometido y empujado contra la cafetera dentro del establecimiento, para a continuación, ya fuera del local, recibir un puñetazo en la cara en la zona del labio o la boca por parte de [el perjudicado]”, apunta el Tribunal. En el caso analizado, resalta la Sala, “si atendemos a los hechos declarados probados, no se puede concluir que la conducta del defensor [...] sobrepasase los límites razonables de la autoprotección”. “Por otro lado, no compartimos la conclusión de la sentencia recurrida, según la cual un golpe o empujón en la parte alta del cuerpo como reacción a la citada agresión ilegítima no se considera un medio racional para repeler la acometida, sino más bien una conducta desproporcionada a la agresión antijurídica sufrida, pues eso significaría obligar al agredido [...] a renunciar al derecho a protegerse de la violencia recibida”, expone el Tribunal. Al respecto, los magistrados advierten de que no es el resultado el que determina la falta de proporcionalidad en la respuesta legítima a una acción antijurídica. “Las lesiones sufridas pueden sugerir exceso o ausencia de necesidad defensiva, pero no es por sí un dato concluyente para excluir un marco de justificación claro como el que se describe en los hechos probados de la sentencia de instancia”.

República Checa (RPI):

- **Primera demanda colectiva en el país.** El Tribunal Municipal de Praga ha dictaminado que la empresa Postýlkov debe indemnizar a la mayoría de sus clientes por no entregar el mobiliario infantil que habían pedido y pagado. Esta es la primera demanda colectiva en Chequia, desde que la ley que regula estos casos entró en vigor hace un año. La disputa involucra a 56 clientes que no recibieron su pedido. El tribunal falló a favor de todos los demandantes, excepto cuatro. Los clientes solicitaban un total de 64.000 euros en indemnizaciones. La empresa, que asegura no estar en retraso y que los clientes no habían rescindido correctamente el contrato, aún puede apelar la decisión, ya que el fallo no es definitivo.

Rusia (La Vanguardia):

- **Tribunal condena a 13 años de prisión a un exviceministro de Defensa por corrupción.** La justicia rusa condenó este martes a 13 años de prisión al Timur Ivanov, quien hasta su detención en abril de 2024 fue uno de los segundos del entonces ministro de Defensa Serguéi Shoigú. El de Ivanov fue el caso de corrupción más grave en Rusia desde el inicio de la guerra en Ucrania, y con él comenzó una purga de generales y altos cargos de Defensa que se interpretó como un intento de sanear las cuentas para que el dinero destinado al Ejército fuera más eficiente. El Tribunal de la Ciudad de Moscú declaró culpable al exviceministro de Defensa por dos episodios de malversación a gran escala y legalización de ganancias criminales. En concreto, y de acuerdo con la sentencia, el delito de malversación se refiere a la apropiación de 216,6 millones de rublos (2,34 millones de euros) de fondos destinados a la compra de transbordadores para cruzar el estrecho de Kerch, así como a la retirada de casi 4.000 millones de rublos (43 millones de euros) del banco en quiebra Intercommerts. **Proceso a puerta cerrada.** Además de los 13 años que deberá pasar en una colonia penal de régimen general, Ivanov tendrá que abonar una multa de cien millones de rublos (1,08 millones de euros). Como media adicional de castigo, el tribunal accedió a la solicitud de la Fiscalía para confiscar bienes del exviceministro por un valor superior a los 2.500 millones de rublos (27 millones de euros). El juez del tribunal anunció la sentencia y la condena de forma abierta, aunque la mayor parte de este proceso se ha llevado a cabo a puerta cerrada por la presencia de secretos de Estado en la documentación presentada. **Supervisaba proyectos de construcción del Ejército.** En el caso también se ha juzgado al antiguo subordinado de Ivanov, el exjefe de logística de Defensa Antón Filátov. El juez le condenó a doce años y medio de prisión. Timur Ivanov, viceministro de Defensa entre 2016 y 2024, estaba al cargo de supervisar proyectos de construcción del Ejército, entre otros la reconstrucción de la ciudad de Mariúpol, devastada durante la conquista rusa, o el parque temático del Ejército Patriot Park, en la Provincia de Moscú. Fue detenido en abril de 2024 y acusado de recibir sobornos “de gran escala”. Fue el primero de una lista de generales y altos cargos del Defensa detenidos en la primavera del año pasado. Protegido de Serguéi Shoigú, uno de los hombres más próximos al presidente ruso, Vladímir Putin, durante el juicio mantuvo su inocencia y sus abogados han anunciado que recurrirán la sentencia. La purga dentro del Ejército se produjo en un momento en el que arreciaban las críticas desde los sectores rusos más belicistas por la distribución de los recursos en el frente de batalla. Los arrestos por casos de corrupción se interpretaron como un movimiento del Kremlin para minimizar los gastos del Ejército y ejercer un mayor control sobre el presupuesto destinado a la campaña en Ucrania. **Putin remodeló la cúpula de Defensa.** Las detenciones fueron seguidas por una

remodelación en la cúpula del Ministerio de Defensa. De hecho, un mes después Putin sustituyó a Shoigú por el economista Andréi Beloúsov, cambio que se interpretó en la misma línea. Además de la apelación anunciada por su abogado, el camino judicial de Timur Ivanov, que tiene 49 años, no ha terminado. Todavía tendrá que hacer frente a la acusación de aceptar sobornos por un total de 1.300 millones de rublos (14 millones de euros), lo que probablemente aumentará el tiempo que deberá pasar en prisión. Varios de los generales detenidos durante la purga ya han pasado por el filtro de la justicia. El teniente general Vadim Shamarin, que era vicejefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas, fue condenado por recibir sobornos a siete años de prisión el pasado mes de abril. Una semana más tarde el comandante general Iván Popov recibió una pena de cinco años en una colonia penal por fraude y fue degradado.

De nuestros archivos:

26 de marzo de 2014
España (Aranzadi)

- **TC: Cataluña no puede convocar un referéndum sobre su independencia.** El Pleno del Tribunal Constitucional (TC) ha estimado parcialmente, por unanimidad, el recurso del Gobierno contra la “Resolución 5/X del Parlamento de Cataluña, por la que se aprueba la Declaración soberanista y del derecho a decidir del pueblo de Cataluña” y ha declarado “inconstitucional y nulo” el principio primero que recoge dicho documento, principio según el cual “el pueblo de Cataluña tiene, por razones de legitimidad democrática, carácter de sujeto político y jurídico soberano”. El TC considera que vulnera los artículos 1.2 y 2 de la Constitución y los artículos 1 y 2.4 del Estatuto de Autonomía de Cataluña. Por otra parte, el Tribunal declara constitucionales las referencias “al derecho a decidir de los ciudadanos de Cataluña” ya que pueden ser interpretadas de conformidad con la Carta Magna, puesto que no consagran un derecho de autodeterminación no reconocido en la Constitución, sino una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional con respeto a los principios de “legitimidad democrática”, “pluralismo” y “legalidad”, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el “derecho a decidir”. Ha sido ponente de la Sentencia la Vicepresidenta, Adela Asua. El primer problema que ha tenido que abordar la Sentencia es el de si debía admitirse la impugnación presentada por el Gobierno contra la Resolución del Parlamento de Cataluña por la que se aprueba una Declaración de soberanía y de derecho a decidir del pueblo de Cataluña. El Tribunal Constitucional entiende que la impugnación es admisible, porque se trata de un acto que puede producir efectos jurídicos. Se afirma que el punto primero de la Resolución impugnada, en cuanto declara la soberanía del pueblo de Cataluña, es susceptible de producir efectos jurídicos puesto que “puede entenderse como el reconocimiento a favor de aquellos a quienes se llama a llevar a cabo el proceso en relación con el pueblo de Cataluña (especialmente el Parlamento de Cataluña y el Gobierno de la Generalitat), de atribuciones inherentes a la soberanía superiores a las que derivan de la autonomía reconocida por la Constitución a las nacionalidades que integran la Nación española”. Por ello, el Tribunal considera que, “sin perjuicio de su marcado carácter político, la Resolución 5/X tiene carácter jurídico y, además, produce efectos de esta naturaleza”. Entrando en el fondo del asunto, el Tribunal declara que “la cláusula primera de la Declaración, que proclama el carácter de sujeto político y jurídico soberano de Cataluña, debe ser considerada inconstitucional y nula”. El reconocimiento que lleva a cabo del pueblo de Cataluña como “sujeto político y jurídico soberano” resulta contrario a los arts. 1.2 y 2 CE y a los arts. 1 y 2.4 Estatuto de Autonomía de Cataluña, así como en relación con ellos a los arts. 9.1 y 168 CE. En particular, se señala que “el reconocimiento al pueblo de Cataluña de la cualidad de soberano, no contemplada en nuestra Constitución para las nacionalidades y regiones que integran el Estado, resulta incompatible con el art. 2 CE, pues supone conferir al sujeto parcial del que se predica dicha cualidad el poder de quebrar, por su sola voluntad, lo que la Constitución declara como su propio fundamento en el citado precepto constitucional: „la indisoluble unidad de la Nación española””. “En tanto que realidad socio-histórica, Cataluña (y España toda) es anterior a la Constitución de 1978. Desde el punto de vista jurídico-constitucional, el „pueblo de Cataluña” invocado por la Declaración integra, sin embargo, un sujeto que se constituye en el mundo jurídico en virtud del reconocimiento constitucional (al igual que sucede con el conjunto del „pueblo español” del que, conforme al art. 1.2 CE, „emanan todos los poderes del Estado”). También afirma la Sentencia que “en el marco de la Constitución una Comunidad Autónoma no puede unilateralmente convocar un referéndum de autodeterminación para decidir sobre su integración en España”. Distinta es la conclusión que alcanza el Tribunal respecto a las referencias al “derecho a decidir”, pues entiende que “cabe una interpretación constitucional” siempre y cuando se entienda como una aspiración política a la que solo puede llegarse mediante un proceso ajustado a la legalidad constitucional

con respeto a los principios de „legitimidad democrática“, „pluralismo“, y „legalidad“, expresamente proclamados en la Declaración en estrecha relación con el „derecho a decidir“¹. El Pleno concluye que “el planteamiento de concepciones que pretendan modificar el fundamento mismo del orden constitucional tiene cabida en nuestro ordenamiento, siempre que no se prepare o defienda a través de una actividad que vulnere los principios democráticos, los derechos fundamentales o el resto de los mandatos constitucionales, y el intento de su consecución efectiva se realice en el marco de los procedimientos de reforma de la Constitución”.

Elaboración: Dr. Alejandro Anaya Huertas

* *El presente Reporte se integra por notas publicadas en diversos medios noticiosos del ámbito internacional, el cual es presentado por la SCJN como un servicio informativo para la comunidad jurídica y público interesado, sin que constituya un criterio oficial para la resolución de los asuntos que se someten a su consideración y sin que asuma responsabilidad alguna sobre su contenido.*